

Editorial

La ofensiva de noviembre, ¿fin de la guerra?

Los medios de comunicación de masas y los discursos oficiales han vendido la idea que, desde 1984, El Salvador ha entrado con paso firme en un proceso de democratización, uniéndose así al coro de las grandes democracias latinoamericanas y occidentales. En efecto, este proceso se habría iniciado con unas elecciones presidenciales bastante libres y se habría caracterizado por una progresiva apertura de los espacios políticos y por una notoria mejora en el respeto de los derechos humanos de la población. Así, El Salvador habría estado luchando, desde entonces, para salir del subdesarrollo y para combatir democráticamente las ambiciones del comunismo internacional, el cual pretendería apoderarse del país con pretensiones hegemónicas. Desgraciadamente, esta imagen ha sido aceptada bastante universalmente, aunque es una imagen distorsionada de la realidad, periódicamente cuestionada por los acontecimientos. De hecho, la ofensiva de noviembre pasado y los hechos subsecuentes han puesto en evidencia otra vez los graves límites de la democracia salvadoreña, tal como puede verse en los artículos de esta edición monográfica de la revista.

Después de la ofensiva ha quedado muy claro que la democracia no es compatible con una guerra como la que en El Salvador han estado librando los dos ejércitos enfrentados durante la última década. Por una parte, el proyecto contrainsurgente de la Fuerza Armada no tiene como meta última la instauración de la democracia, sino la eliminación del movimiento revolucionario; sólo secundaria y derivadamente pretendería instaurar la democracia en el país. Consecuentemente, en la primera fase de esta guerra, la Fuerza Armada trató de aniquilar a los grupos contrainsurgentes de forma rápida y brutal, combinando la acción militar con una campaña de represión masiva de la población civil. Pero como esta campaña no dio resultados, el proyecto contrainsurgente fue replanteado, tratando de conseguir los mismos objetivos con formalidades democráticas que justificaran el proyecto

mismo.

Este reacomodo ha generado la contradicción entre las necesidades militares y las exigencias políticas, entre la eliminación de toda la oposición y el acallamiento de las protestas significativas, y la necesidad de ofrecer o aparentar respeto al libre juego político. Para salir adelante, el proyecto contrainsurgente ha debido buscar una forma de guerra sucia que le permitiera alcanzar sus fines, eludiendo sus costos políticos, y cree haber encontrado la respuesta en la guerra psicológica. Esta modalidad de guerra paralela, presuntamente, permite lograr los mismos objetivos y produce consecuencias similares psicosociales en la población que la guerra sucia, pero ha logrado salvaguardar hasta ahora la imagen de democracia formal, tan necesaria para el gobierno de turno y su patrocinador norteamericano en orden a conservar el apoyo de la opinión pública y aún de otros gobiernos democráticos. Tanto el gobierno demócrata cristiano como el de ARENA ha sido y está siendo víctimas de esta contradicción, pues, pese a sus programas y voluntades políticas, ambos partidos han sido gerentes del proyecto contrainsurgente, no sus directores ni mucho menos sus planificadores.

La guerra psicológica, sin embargo, no ha podido contener la realidad, la cual al desbordarse ha estado empañando la imagen promovida y defendida por los patrocinadores del proyecto contrainsurgente. Justamente, esto es lo que ha sucedido durante y después de la ofensiva de noviembre recién pasado. La realidad ha demostrado con toda su crudeza la contradicción insalvable entre guerra y democracia.

Por otro lado, de parte del FMLN no está del todo claro cómo quiere conseguir una democracia real con medios tan violentos como la ofensiva. Antes de ella, parecía que, sin abandonar la posibilidad de una ofensiva general, acompañada de una insurrección popular, había abierto otras vías como la de las elecciones y la de la negociación. A comienzos de 1989 parecía que el éxito de su propuesta de paz de ese entonces lo había llevado a poner en segundo plano la solución violenta para buscar la paz y el poder, situando en primer plano la solución política de la negociación y de la participación en futuras elecciones. Al volver a colocar en primer término la violencia con la ofensiva urbana de noviembre, el FMLN ha ratificado su convencimiento de que sus adversarios sólo hacen caso a la presión de la fuerza y por eso lanzó la ofensiva. De este modo, cerró los espacios políticos y populares abiertos con tanto esfuerzo en los meses anteriores, empleando toda la fuerza acumulada en la alternativa militar. Esta alternativa militar es tan ajena a cualquier proceso democrático como la del proyecto contrainsurgente.

1. La prioridad de la guerra anula el camino a la democracia

Esta larga década de guerra ha demostrado, desde diversos ángulos de la realidad nacional, que la democracia salvadoreña ha quedado reducida al mínimo por el esfuerzo militar, pues éste ha obligado a concentrar la mayoría de los recursos materiales y lo mejor de los recursos humanos en la destrucción del enemigo.

(a) En efecto, desde 1980, la política económica de los diferentes gobiernos no ha dado resultados positivos en cuanto a satisfacer las necesidades básicas de las mayorías populares ni mucho menos en cuanto a elevar su nivel de vida, porque se ha empeñado en considerar la guerra como un fenómeno independiente o ajeno a la crisis económica. En lugar de atender a las raíces de la crisis económica, las cuales se encuentran profundamente arraigadas en el injusto modelo socio-económico heredado, las sucesivas políticas económicas se han ido dedicando cada vez más a aplicar medidas contrainsurgentes, quizás buenas para la guerra, pero que, de hecho, han ido empobreciendo cada vez más a los salvadoreños más pobres.

Si en 1977, el 31.8 por ciento de las familias salvadoreñas estaba por debajo de la línea de pobreza absoluta; en 1988, ese porcentaje se duplicó al representar el 64 por ciento de las familias. En ese año de 1988, el 85.5 por ciento de todas las familias salvadoreñas estaba por debajo de la pobreza relativa. En la década que va de 1978 a 1988, el costo de la vida aumentó cinco veces, mientras que los sueldos y salarios lo hicieron a un ritmo mucho más lento. Según estos datos, El Salvador es un país habitado por pobres, quienes se han ido empobreciendo cada vez más a causa de la inflación, la depresión económica y las políticas estatales, las cuales han obligado a los asalariados a pagar por las medidas estabilizadoras. Esto es muy poco democrático, obviamente.

(b) En segundo lugar, en la década que va de 1977 a 1988, el presupuesto de defensa aumentó proporcionadamente al pasar del 7.5 al 25.9 por ciento y los de salud y educación disminuyeron, pasando del 32.6 al 22.8 por ciento. Los gastos de funcionamiento del gobierno, conformados por sueldos y salarios, representaban el 47.3 por ciento de todo el presupuesto nacional en 1987. Cuando los recursos nacionales se agotaron, siendo imposible recortar más el presupuesto del resto de las unidades gubernamentales, pasamos a depender cada vez más de la

Después de la ofensiva ha quedado muy claro que la democracia no es compatible con una guerra como la que en El Salvador han estado librando los dos ejércitos enfrentados.

ayuda exterior, fundamentalmente norteamericana. En efecto, entre 1981 y 1988, la AID donó 3,312.6 millones de dólares, de los cuales el 73 por ciento fue destinado a ayuda vinculada con la guerra.

A estos gastos militares cada vez más elevados, hay que añadir, aparte de los 72 mil salvadoreños muertos, 1,200 millones de colones en daños a la economía, causados directamente por la guerra entre 1979 y 1987, la mayor parte de ellos en los rubros de energía y transporte. Sólo la ofensiva de noviembre, en sus primeros doce días, costó al país, en términos reales, el 8.25 por ciento del total de los costos de nueve años de guerra (de 1979 a 1987) y ha tenido efectos negativos sobre la inflación, el empleo, la producción, el cambio de

moneda, la inversión, el déficit fiscal y las necesidades básicas, concretamente en la vivienda popular. El ministerio de planificación ha estimado que en la ofensiva cayeron 4,389 personas, la mayoría de ellas combatientes.

(c) Por lo tanto, difícilmente puede llamarse democrático un país donde el 85 por ciento de su población tiene que vivir por debajo del nivel de pobreza relativa, generando densas corrientes migratorias hacia el norte en busca de mejores oportunidades de vida. El elevadísimo volumen del presupuesto de defensa demuestra cuál es la prioridad nacional, dejando postergadas la salud, la vivienda y la educación de la mayoría de los salvadoreños. Las donaciones de Estados Unidos tampoco han sido destinadas en su mayor parte para poner unas bases sólidas para la democracia, sino para hacer la guerra. Es cierto que ha habido dólares para algunos programas de desarrollo, pero todo ello como parte del plan contrainsurgente y sin considerar los intereses y las necesi-



La democracia salvadoreña ha quedado reducida al mínimo por el esfuerzo militar, pues ésta ha obligado a concentrar la mayoría de los recursos materiales y lo mejor de los recursos humanos en la destrucción del enemigo.

dades de la mayoría de los salvadoreños.

La destrucción de los recursos materiales que ha ido dejando esta ya larga y sangrienta guerra no ha permitido ni permitirá a ningún gobierno, prescindiendo de su ideología, desarrollar un plan económico orientado al desarrollo nacional y, mucho menos, satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de los salvadoreños. El plan de rescate nacional del gobierno actual ya se encuentra empantanado, aprisionado por la guerra y sus consecuencias. El gobierno de ARENA, al igual que el de la democracia cristiana, ha tenido que concentrar sus esfuerzos económicos en buscar la forma de sobrevivir, superando crisis constantemente. Todavía no ha tenido tiempo, ni parece que lo tendrá, mientras no cese el fuego y la destrucción, tampoco ha tenido recursos para echar a andar su plan de rescate nacional. Así, por ejemplo, la privatización de la banca ha tenido que posponerse, esperando mejores oportunidades. ARENA difícilmente va a poder cumplir con sus promesas económicas y eso tendrá un costo político muy elevado en las próximas elecciones. De hecho, el peso de su primera serie de medida estabilizadoras ha caído sobre los más pobres, a quienes el presidente Cristiani dijo audazmente que iba a favorecer durante su gobierno.

Este balance económico tan negativo y la imposibilidad de revertirlo, si no acaba la guerra, es una fuente constante de descontento popular y sigue presentando al movimiento revolucionario como una alternativa posible para muchos salvadoreños, porque significan más pobreza e incluso hambre para la mayoría de ellos. Mientras no se avance realmente en la resolución de los graves problemas económicos y sociales, éstos seguirán generando conflictividad social y guerra, y la democracia seguirá siendo una fachada.

(d) Si de lo que se trata es de destruir al enemigo, no es nada fácil respetar los derechos humanos y las convenciones internacionales como las de Ginebra. La experiencia nos ha demostrado ya que cuando la guerra se intensifica y extiende su radio de acción, la violación de los derechos humanos aumenta significativamente. Esto es igualmente válido para cualquiera de los dos ejércitos, aunque el FMLN no viola los derechos humanos masiva e indiscriminadamente.

Durante la ofensiva de noviembre, la Fuerza Armada, como parte de su esfuerzo militar para contener el ataque del FMLN, desató de nuevo

la represión contra los partidos políticos de la oposición, el movimiento sindical, las iglesias y los grupos de asistencia humanitaria. Asimismo cerró los espacios políticos para los partidos opositores y el movimiento popular, y aumentaron las capturas, los registros, las torturas, los desaparecidos y los asesinados. Después de la ofensiva, el ejército ha mantenido un férreo control sobre el movimiento popular. De hecho, ha prohibido las manifestaciones populares con el pretexto de proteger a la población contra los actos terroristas del FMLN, pero, en realidad, ha sido para evitar las protestas contra las medidas estabilizadoras del gobierno de ARENA.

En los primeros días de la ofensiva, la Fuerza Armada no se detuvo ante las órdenes que tiene de no bombardear las zonas pobladas. Su interés era sacar al FMLN de sus posiciones, no defender a la población de los barrios y colonias populares de la zona metropolitana de San Salvador. Las bombas cayeron indiscriminadamente, porque se trataba de desalojar al FMLN de sus posiciones, prescindiendo de los costos sociales y humanos. De esta forma, la población de estos barrios y colonias, donde el FMLN se atrincheró, fue duramente castigada. Sin embargo, su comportamiento fue distinto cuando el FMLN entró en las colonias Escalón y San Benito. En estas últimas zonas residenciales, la Fuerza Armada contuvo sus impulsos de aniquilación total. Las iglesias y los organismos humanitarios y de asistencia social también duramente castigados por la Fuerza Armada, lo fueron, ciertamente, por su compromiso con las clases populares más pobres. Por otro lado, al FMLN se le acusa de haber usado a la población civil como escudo, incluso de haber impedido que ésta abandonara sus viviendas cuando sus combatientes se presentaron, y de haber ajusticiado a algunos informantes del ejército. Asimismo se lo responsabiliza por los daños causados durante el ataque que hizo contra el hospital de Zacatecoluca.

Todo esto demuestra que, estando en guerra civil, no se pueden hacer avances sólidos y seguros hacia la democracia. De hecho, hasta ahora, estos avances han sido más bien tímidos. Pero, por otro lado, los pocos logros conseguidos han sido cuestionados seriamente cada vez que la guerra ha intensificado su dinámica y ha extendido el radio de su acción destructiva. La vida misma se ha vuelto tan precaria y vulnerable, y el miedo a la muerte tan universal que la exigencia de respetar los derechos humanos se ha convertido en un reclamo para respetar el derecho fundamental y primero de todos, el de la vida.

A las condiciones de la lucha armada obedece también la integración de un frente monolítico, alineado con la Fuerza Armada, y la intolerancia hacia los disidentes políticos, sociales y religiosos. La guerra difícilmente tolera la oposición, entendida como la existencia de adversarios, interlocutores y proyectos alternativos, dentro del propio

bando. La misma dinámica militar lleva a tratar de neutralizarlos, o a eliminarlos, en la primera oportunidad. Por eso, es más propio hablar de resistencia y supervivencia que de oposición.

Bien han notado algunos políticos norteamericanos que la Fuerza Armada no puede distinguir entre los disidentes políticos, sociales y religiosos, y los rebeldes armados. Sin embargo, también deberían reconocer que sus asesores militares son quienes le han enseñado, utilizando la doctrina de la seguridad nacional, que quien no está de su lado está en su contra, y, por lo tanto, del lado del enemigo, y como él, debe correr la misma suerte, ser destruido. Ellos le han enseñado a dividir la sociedad en amigos y enemigos. Los primeros están in-



condicionalmente de su lado; los otros, con el FMLN. De ahí la contradicción entre las necesidades militares y las exigencias políticas de la democracia.

Más aún, el seguimiento de las violaciones de los derechos humanos se ha convertido también en parte de la guerra. Ambos ejércitos cuentan con sus propios organismos para denunciar las violaciones del otro, manipulando las estadísticas y los casos. Ni siquiera la embajada norteamericana se ha visto libre de esta guerra de estadísticas y propaganda, la cual nada tiene que ver con la realidad de las víctimas ni con el dolor de sus familiares y amigos. Así, pues, también los derechos humanos han quedado subordinados a las vicisitudes de la guerra.

2. El obstáculo principal para la democracia: la militarización de la realidad

En este esquema de guerra total contra el enemigo, la Fuerza Armada, por su naturaleza, ha ido asumiendo cada vez más un papel determinante en la sociedad y en el Estado. Las elevadas asignaciones presupuestarias y las masivas donaciones norteamericanas son una muestra de esta importancia. Con esos fondos y asesorada por militares norteamericanos, la Fuerza Armada ha crecido numéricamente y ha llegado a hegemonizar la sociedad y el Estado mismo, de tal forma que en El Salvador no se puede hacer casi nada en contra de su parecer, dado el inmenso poder de veto que ha adquirido. Más aún, al arrogarse la función de garantizar la constitucionalidad del país ha encontrado una vía de legitimidad jurídica nada despreciable. Esto no debe sorprender si la tarea principal es derrotar al FMLN. La hegemonía que la Fuerza Armada reclama y ejerce en nombre de la misión que dice tener ha anulado, de hecho, las funciones y poderes de los otros órganos del Estado, poniendo en entredicho el proceso democrático mismo.

Las masacres de la UCA, Cuscatancingo y Guancorita no pueden considerarse como hechos aislados, porque su modo de proceder ha sido el mismo en todas ellas, desde el asesinato y violación de las cuatro religiosas norteamericanas en 1980, el asesinato de los periodistas holandeses en 1982, el de Jürg Weiss en 1988, y las masacres de Las Hojas y San Sebastián. En todos estos casos, la Fuerza Armada ha tratado de encubrir los hechos y ha agredido a quienes los han denunciado, invirtiendo los papeles al presentarse ella misma como parte ofendida y al presentar a las víctimas y a sus defensores como los agresores.

En la Fuerza Armada, por otro lado, existe la convicción profunda de que los militares no han estado ni deben estar sometidos a ninguna ley. Hasta ahora ninguna instancia judicial ha podido hacer que un

criminal uniformado rinda cuentas ante la justicia. Ni siquiera el gobierno de Estados Unidos ha podido controlar esta estructura de impunidad. El apoyo y la protección que sus compañeros de promoción han brindado al coronel Benavides, a quien tampoco han privado de ninguna comodidad, demuestra la connivencia institucional con el crimen y la impunidad, pasando por encima del malestar del presidente, de la indignación de Washington y del daño que causan a la institución castrense.

Todo esto muestra que la administración de justicia tiene un límite casi insalvable en la Fuerza Armada, porque si hubiera voluntad política de hacer justicia, ella misma, o en su defecto, las autoridades judiciales competentes, mostrarían más su celo. En vez de eso, se ha defendido la impunidad de la Fuerza Armada, alegando la situación de guerra y revirtiendo los papeles. La propaganda oficialista ha defendido que la Fuerza Armada no puede cometer actos terroristas, porque éstos son competencia exclusiva del FMLN; ella defiende a la población de aquéllos. De esta forma, un sector importante de nuestra sociedad se encuentra más allá de la justicia, lo cual no es aceptable en ninguna democracia.

El FMLN también padece las contradicciones entre los planteamientos militares y las necesidades políticas. En efecto, el FMLN dice haberse visto obligado a lanzar la ofensiva que venía preparando desde hacía algunos meses cuando vio que los encuentros con el gobierno eran diálogos sin voluntad de negociar. Según su versión, estos encuentros tenían el objetivo de dar tiempo para que se consolidara el gobierno de ARENA, al que considera casi fascista. Como el gobierno y la Fuerza Armada interpretaron la flexibilidad del FMLN como debilidad y endurecieron sus posiciones, lanzando operativos y escalando la represión contra los partidos políticos y la organizaciones populares y sindicales, a aquél no le habría quedado otra alternativa que lanzar la ofensiva. El FMLN mantiene que, si hubiera habido voluntad de negociación por parte del gobierno y de la Fuerza Armada, se hubiera comprometido completamente con ella.

La ofensiva, según el FMLN, puso sobre la mesa la verdadera correlación de fuerzas. Para él fue necesario demostrar la falsedad de la tesis de la Fuerza Armada, la cual sostenía que el FMLN estaba débil, que no tenía arraigo popular y que estaba reducido a pequeños grupos de terroristas aislados en las montañas. La demostración la hizo cuestionando a fondo el poder militar del ejército y la capacidad del gobierno para controlar el país, y, derivadamente, la ayuda incondicional de Estados Unidos. El FMLN buscaba una definición militar, puesto que trató de conquistar posiciones para avanzar hacia los cuarteles y las guarniciones más importantes, las cuales se

encuentran enclavadas en los centros urbanos del país. Además de desautorizar la tesis de la Fuerza Armada, el FMLN quería abrir espacios para el diálogo y la negociación. Supuestamente, el gobierno y la Fuerza Armada al dar por descontada la derrota militar en el corto plazo, se sentarían a negociar la integración del FMLN al proceso político nacional.

De acuerdo a su primer balance, el FMLN considera como logros el haber demostrado que, después de tanto apoyo norteamericano a la Fuerza Armada, no está débil ni derrotado y cuenta con apoyo popular; que el gobierno de ARENA tan cuidadosamente mantenido con los dólares y las imágenes de la propaganda no controla el país ni es moderado. Asimismo, considera que ha abierto espacio para definir el conflicto en términos favorables a las mayorías; que la ONU ha reconocido por primera vez que el FMLN es la otra parte del conflicto; que ha desenmascarado el carácter fascista del ejército y del gobierno; que está claro internacionalmente que la vía militar no es la solución para resolver el conflicto, sino la negociada con la asistencia de la ONU, lo cual da nuevas posibilidades a ésta; que el tema de la negociación ya forma parte de todas las agendas internacionales; que el debate sobre la ayuda norteamericana se ha abierto en Estados Unidos no sólo en los círculos gubernamentales, sino también entre la población. Pero pese a que el FMLN cree "tener la responsabilidad ante nuestro pueblo de buscar el camino más corto para definir de una vez la situación," los sucesos de los cuatro últimos meses más bien parecen tender a prolongarla más. En efecto, el FMLN sostiene que después de la ofensiva, la dinámica para abrir el proceso de negociación tiene mayor fuerza, pero en la medida en que éste no se concrete, la guerra va a seguir y, en la medida en que la Fuerza Armada continúe reprimiendo y lanzando operativos, la guerra tenderá a intensificarse.

Si bien el FMLN, por un lado, se entiende a sí mismo como la vanguardia del pueblo salvadoreño cuya misión es liberarlo de sus miserias y opresiones e instaurar un régimen democrático; por el otro lado, la mayoría del pueblo no parece estar muy identificada con su vanguardia. Las encuestas del Instituto Universitario de Opinión Pública de 1988 indican que alrededor del 85 por ciento de la población está en desacuerdo con la estrategia del sabotaje. Más significativa es la percepción de los encuestados sobre el principal responsable de las violaciones a los derechos humanos. El 22.5 por ciento dice que es el FMLN y el 10.8 por ciento, la Fuerza Armada. Esta percepción es más acusada en los estratos sociales más pobres. Aparte de los estereotipos difundidos por la propaganda y de las dificultades intrínsecas de todo proceso de concientización colectiva, el FMLN ha cometido errores políticos graves, como lo son ciertos actos de terrorismo, que han dado



fundamento a los estereotipos.

Durante la ofensiva, la esperada insurrección no se produjo. El FMLN explica que fue porque no pudo mantener las posiciones; de haberlo podido hacer, hubiera habido insurrección. Pero para eso debió contar con armas para neutralizar la aviación gubernamental. Pese a ello, el FMLN dice que hubo numerosas incorporaciones a sus filas, suficientes como para reemplazar a sus bajas. El dato cuestionante es que el FMLN no cuenta con el respaldo masivo de la población que dice querer

liberar. Esto no significa, sin embargo, que la población apoye el proyecto contrainsurgente de la Fuerza Armada. Los datos muestran que la mayor parte de la población está en contra de la guerra. Aquella más bien trata de mantenerse al margen de las confrontaciones militares de los dos ejércitos y así quiere permanecer hasta que se termine el conflicto. La guerra no es, por lo tanto, el medio adecuado para ganarse el apoyo popular mayoritario. De este modo, ambos ejércitos se encuentran librando una guerra para liberar al pueblo salvadoreño de supuestos opresores, pero sin contar con su apoyo mayoritario. Así, pues, las estrategias del FMLN, y también las de la Fuerza Armada, han estado más dictadas por las necesidades de la guerra que por las exigencias de la política.

3. Es necesario terminar con la militarización para comenzar la democracia

La guerra ha dejado reducida la democracia a unas elecciones bastante aceptables y a los respectivos cambios de gobernantes, a quienes les corresponde administrar el proyecto contrainsurgente planificado y dirigido por Estados Unidos y ejecutado por la Fuerza Armada. A los políticos les ha quedado la responsabilidad de cuidar la fachada del proceso. Por eso, la guerra terminará cuando así lo decidan los dos ejércitos. En esto tiene razón el FMLN al pedir negociar

directamente con la Fuerza Armada.

Después de diez años de sangrienta y destructiva guerra, la democracia sigue siendo imposible en El Salvador. La ofensiva de noviembre y sus resultados nos están brindando a todos una nueva oportunidad para cuestionarnos sobre la conveniencia de seguir con la guerra durante más tiempo. Después de una década y de miles de millones de dólares podemos preguntarnos cómo pudieron infiltrarse más de mil insurgentes en San Salvador, sin mencionar las toneladas de municiones y armamentos que introdujeron y almacenaron. Parte de la respuesta está en los presupuestos optimistas de la embajada de Estados Unidos y de la Fuerza Armada sobre el poder militar del FMLN. Un mal cálculo que llevó a subestimaciones gruesas sobre el número de insurgentes que el FMLN podía movilizar. Otra parte de la respuesta parece estar en la incapacidad de la Fuerza Armada para derrotar al FMLN, documentada ya en varios estudios militares. El FMLN tampoco pudo conseguir una victoria militar, ni las masas se levantaron ni cayó en sus manos ningún cuartel importante. La ofensiva de noviembre parece demostrar claramente que el tiempo de la guerra ha concluido y que ha llegado el momento de trabajar seriamente para sacar adelante la negociación.

Para que el diálogo-negociación avance irreversiblemente, ambos ejércitos deben ponerse a su servicio, abandonando sus esquemas militaristas. En consecuencia, los poderes reales deben negociar cómo revertir el proceso de la guerra y de la destrucción en otro de paz y construcción, pasando de la búsqueda de la liquidación del adversario a la manera cómo tolerarlo e incorporarlo en la vida civil. En este contexto debe colocarse la petición del FMLN de depurar la Fuerza Armada de todos aquellos elementos responsables de crímenes y delitos. Pero si de lo que se trata es de construir una democracia real habría que pensar también en desmilitarizar el país, es decir, no sólo en reducir el tamaño y el armamento del ejército, sino en su profesionalización total en cuanto debe estar sometido al poder civil. Este es, precisamente, uno de los problemas más importantes de Nicaragua después de las elecciones. El nuevo gobierno quiere tener control completo del ejército y del ministerio del interior, donde se encuentra la seguridad del Estado, porque sabe que solamente así podrá gobernar y sentirse seguro. El ejército nicaragüense, por otro lado, quiere conservar su autonomía y su línea de mando. El punto está, por tanto, en cuánto poder tendrá el nuevo gobierno sobre el ejército y el ministerio del interior, y en cuánto poder cederán estas dos instituciones estatales a aquél. No es nada fácil encontrar el punto de equilibrio, pues, por su naturaleza, el ejército, cualquier ejército, requiere de autonomía. El problema es el mismo, prescindiendo de las ideologías.

De ahí la contradicción entre las necesidades militares y las exigencias políticas de la democracia.

En todo esto, como en la marcha de la guerra, Estados Unidos tiene la palabra decisiva. Aparentemente, la masacre de la UCA y lo que la ofensiva ha mostrado han convencido a Washington de que ha llegado el momento de explorar la negociación. Sin embargo, no hay que hacerse muchas ilusiones. Estados Unidos ha demostrado ser generoso y rápido en dar dinero para la guerra y la destrucción, pero lento y estrecho para construir y reparar los daños que su torpe política centroamericana ha hecho. Panamá y Nicaragua son dos ejemplos recientes y cercanos. Ambos gobiernos ya se han desengañado ante la lentitud y estrechez norteamericana para financiar la democracia y el desarrollo. El presidente de Panamá ha tenido que recurrir al dramático gesto de ponerse en huelga de hambre en la catedral. A los asesores del nuevo gobierno nicaragüense ya les han dicho que les darán mucho menos de lo que están pidiendo. Ojalá Estados Unidos sea más clarividente y generoso con nosotros y nos preste recursos para reconstruir nuestro país y relanzar la recuperación económica, teniendo muy en cuenta las necesidades básicas de las mayorías populares. Para ello, por supuesto, primero tendremos que comenzar a parar la guerra, revirtiendo sus dinanismos destructores, y luego iniciar la construcción de la paz con justicia.

No tenemos razones para pensar que Estados Unidos será más generoso con nosotros. Por lo tanto, entre más se prolongue la guerra y su secuela de muerte y destrucción, más estamos hipotecando el futuro económico y político de El Salvador.